

La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder*

Carlos Crespo Flores**

INTRODUCCIÓN

De pronto, desde Cochabamba, en el entrópico escenario de la política boliviana, ha hecho su aparición un fenómeno social aún poco comprendido y explicado: la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida. Mientras el gobierno boliviano calificó de «salvaje» a la impronta de la plebe en la plaza de armas, los politólogos entusiastas de la gobernabilidad y el consenso a ultranza estigmatizaban el movimiento como «carente de objetivos» y «enemigo de la concertación». Tales juicios apresurados, no permiten comprender la complejidad y riqueza de la experiencia cochabambina.

* Una versión preliminar fue presentada en el seminario "Agua en Cochabamba. Problemas, conflictos y perspectivas", en abril 2000. Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba-Bolivia.

** El autor es Coordinador del Área de Medio Ambiente, en el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU-UMSS), Cochabamba-Bolivia.. (crespoflores@yahoo.com)

El presente texto referirá dos temas:

1. Caracterizar el fenómeno Coordinadora desde el debate de los denominados «nuevos movimientos sociales», en el contexto del neoliberalismo como instrumento de expansión del capitalismo global. Analizando desde su identidad, adversarios y objetivos, se busca mostrar la relación existente entre el movimiento de la Coordinadora y los nuevos movimientos sociales, de resistencia a la globalización neoliberal.
2. Mostrar los dispositivos discursivos de poder que han sido puestos en tela de juicio por la Guerra del Agua, es decir aquellas verdades que producen conocimiento, actitudes, comportamientos, que en suma han constituido al sujeto cochabambino.

El documento está animado por la perspectiva genealógica de M. Foucault, para quien, se trata «más bien de interrogar este gesto enigmático... por el cual se hallen constituidos los discursos verdaderos» (Foucault en Minello 1999:336), analizar las condiciones de producción de estos «discursos de verdad», y más aún buscar revelar las tácticas de resistencia a los procesos de normalización generados por estos discursos (Darier 1999:18).

El presente texto forma parte de una investigación mayor sobre políticas sobre recursos hídricos y conflictos en el valle cochabambino.

ANTECEDENTES

Bolivia ha sufrido el Ajuste Estructural, bajo recomendaciones del Banco Mundial, a partir del año 1985, expresado en reformas económicas, sociales y políticas, orientadas a promover una economía de mercado, una sociedad de

stakeholders y un sistema político basado en la democracia liberal representativa.

Desde principios de los años noventa, el Banco Mundial (BM) ha apoyado, técnica y económicamente, la reforma del sector de agua potable y alcantarillado sanitario, como parte del Ajuste Estructural, orientado a la privatización de las principales empresas municipales de agua del país, la implantación del principio de *full costs recovery* en la fijación de tarifas, y la introducción de criterios de mercado en el uso y acceso de los recursos hídricos; en este marco se creó el Viceministerio de Saneamiento Básico, se fortalecieron institucionalmente las empresas a ser privatizadas, entre ellas el Servicio Municipal de Agua Potable y alcantarillado (SEMAPA) en Cochabamba, y se implementó la Superintendencia de Saneamiento Básico como autoridad regulatoria.

El Ajuste Estructural debilitó la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente la Central Obrera Boliviana (COB), que hasta 1985 constituyó un verdadero factor de poder en la política boliviana, e introdujo la mediación política partidaria dentro la cultura política del país.

Desde los setenta, en el valle de Cochabamba, ya existían movimientos campesinos de resistencia a la explotación de recursos hídricos para consumo de la ciudad; en 1994 y 1997 se generan grandes movilizaciones campesinas contra la perforación de pozos profundos, por parte de la entonces empresa municipal de agua (SEMAPA) (Crespo 1999; Fernández 1999). De estos movimientos surgirá posteriormente la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), uno de los actores principales involucrados en la Guerra del Agua.

Históricamente el tema del agua ha sido muy sensible en la región, pues el valle de Cochabamba (donde viven alrededor de 700.000 personas, del área urbana y rural) es una zona ecológicamente considerada semiseca, por tanto sufre una crónica escasez del recurso. Por otro lado, en la ciudad de Cochabamba, apenas el 50 por ciento de la población tiene acceso al sistema público de distribución de agua potable, por tanto el 35 por ciento se ha organizado en cooperativas, asociaciones, comités de agua, y un 15 por ciento se aprovisiona a través de carros cisterna («aguateros»); definitivamente, la inequidad socioeconómica y la segregación urbana se refleja en la inequitativa distribución y acceso al agua.

Desde hace aproximadamente 40 años, desde los sectores económicos y políticos dominantes de la región se ha planteado como solución la implementación de un megaproyecto de trasvase de agua, mediante un túnel de 19 km de largo y una presa de 115 metros de altura. Este proyecto, denominado Mísicuni, ha sido instrumentalizado por las élites políticas para ganar elecciones y obtener otras ventajas políticas.

LOS HECHOS

Las causas directas para el conflicto fueron dos:

1. La concesión, en forma poco clara, de la empresa municipal de distribución de agua (SEMAPA) a un consorcio privado internacional, denominado «Aguas del Tunari», incluyendo la implementación del proyecto Mísicuni (septiembre 1999).
2. La aprobación en el parlamento, de manera no consensuada, de la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (octubre 1999), siguiendo recomendaciones del BM: en junio de 1999 un informe reservado de este organismo sugiere las concesiones privadas, destaca el rol de las superintendencias como organismos de regulación, y propone la no subvención en los servicios básicos (World Bank 1999).

Desde junio de 1999, un grupo de profesionales se reunió para analizar las probables consecuencias de la Ley, y se organiza en torno a un Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar.

En septiembre del mismo año el gobierno, a través de la Superintendencia de Aguas, realiza la concesión de SEMAPA, a la única empresa que se presentó a la concesión: el consorcio internacional AGUAS DEL TUNARI, creado en las Islas Caimán, como se sabe un paraíso fiscal, con un capital prácticamente simbólico; la sociedad estaba conformada por International Water U.K. (subsidiaria a su vez de Bechtel) con un 55 por ciento de las acciones, Abengoa de España con un 30 por ciento, y el resto por empresas bolivianas, una de ellas vinculada con el gobierno actual. La concesión de hecho era

irregular, pues no llenaba los requerimientos establecidos por la legislación boliviana (se necesitan tres propuestas para validar una licitación).

A las pocas semanas (fines de octubre), se aprueba en una sesión que dura 36 horas, la Ley No 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Organizaciones de la sociedad civil cochabambina hacen conocer sus observaciones a ambas decisiones gubernamentales:

- ✓ No respeto a usos y costumbres, esto quiere decir, las formas tradicionales de acceso y uso del recurso.
- ✓ Inseguridad sobre el futuro de las instituciones de distribución de agua que no tienen fines de lucro: en las zonas de concesión sólo la empresa concesionaria tenía derecho a la distribución quedando excluidas la multiplicidad de organizaciones alternativas existentes, como asociaciones, comités, cooperativas de agua).
- ✓ Monopolio de concesionarios empresariales.
- ✓ Inseguridad en la posesión de fuentes de agua, utilizadas por las comunidades campesinas y regantes, en muchos casos desde épocas pre republicanas.
- ✓ Excesivo poder de la Superintendencia, organismo de regulación que concentra competencias y poderes vulnerando derechos democráticos básicos como el de consulta y participación ciudadana en la gestión de los servicios básicos y los recursos naturales.
- ✓ Modificación de tarifas sin consultar con la población, además de estar indexadas al dolar americano.
- ✓ Criterio económico en la fijación de tarifas y concesiones, antes que sociales y ambientales.

El mes de noviembre se organiza el primer bloqueo de campesinos y regantes, dejando casi paralizada la región. Ese mes se crea la *Coordinadora Departamental del Agua y la Vida*, organismo que agrupa a una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil regional.

Pero la gota que llenó el vaso fue el incremento de las tarifas de agua en un 35 por ciento promedio, a partir de ene-

ro del 2000, sin que la concesionaria hubiera mejorado previamente el servicio;¹ la población reaccionó con indignación y el 11 de enero se realizó una movilización organizada por la «Coordinadora», que terminó en represión policial. El 4 de febrero, la «Coordinadora» organizó «la toma simbólica de la ciudad de Cochabamba», para demandar, festiva y pacíficamente, cinco puntos:

- Derogación de la Ley de de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
- Derogatoria de los decretos 25351 y 25413, que hicieron posible la concesión.
- Nulidad del contrato con Aguas del Tunari.
- Destitución del Superintendente de Saneamiento Básico.
- Consensuar con todos los sectores la Ley del Recurso Agua, en fase aprobación en el parlamento

El gobierno reprimió violentamente la protesta, los enfrentamientos continuaron el día 5, pues la población (urbana y rural) espontáneamente salió a las calles para enfrentar a la policía, la ciudad quedó completamente paralizada por los bloqueos en todas las rutas de acceso dentro y fuera del centro urbano.

Resultado de la revuelta: 22 heridos, 135 detenidos, y un acuerdo, bajo la mediación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, cuyos puntos más importantes son:

- Revisión del contrato de concesión con «Aguas del Tunari».
- Elaboración de una ley modificatoria de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con participación de las representaciones campesinas, regantes y organizaciones sociales de distribución de agua.
- Suspensión del incremento tarifario mientras concluyan las negociaciones.

Es decir, la movilización obliga al gobierno a reconocer a la Coordinadora como actor del conflicto y negociar modificaciones a la Ley y Contrato.

En las negociaciones de la Ley, se logran acuerdos, logrando modificar 31 artículos de los 75, hecho inédito en la vida política y legislativa de Bolivia. Pero en las negociaciones del

¹ En realidad este incremento alcanzaba a mas del 200 por ciento en muchos casos.

Contrato no hay acuerdos, y al cabo de una semana la Coordinadora decide abandonar las negociaciones, luego de emitir su documento de conclusiones.

En marzo, la Coordinadora organiza un referéndum público, preguntando a la población si estaba de acuerdo con la rescisión del contrato con «Aguas del Tunari» y la modificación de la Ley 2029; la participación fue masiva, a pesar de la escasa difusión; más del 90 por ciento de los votantes apoyaron las acciones de la Coordinadora.

Con esa legitimidad, el 4 de abril, la Coordinadora inicia la denominada «Batalla final», pidiendo que «Aguas del Tunari» se vaya del país; la ciudad es prácticamente tomada por la multitud durante una semana, hay enfrentamientos con la policía y ejército, con un saldo de un muerto y 30 heridos; se declara el estado de sitio, aún así la movilización continúa; el 10 de abril había casi 50.000 personas tomando la plaza de armas; el gobierno decide rescindir el contrato con la empresa, y AT decide retirarse de Bolivia, pidiendo una indemnización millonaria. La victoria es de la Coordinadora, convertida en portavoz de la región.

El gobierno declara que no pagara una cuantiosa deuda que arrastra la empresa de agua y señala que la Coordinadora se hará cargo de la administración. Ésta acepta y en este momento hay un debate sobre el tipo de empresa de agua que se debe implementar, pero manteniendo su carácter público.

En mayo, Oscar Olivera, uno de los líderes de la Coordinadora viajó a Washington, durante las protestas anti-globalización; allá la experiencia de la Coordinadora fue considerada como un ejemplo para los movimientos sociales del mundo que están luchando contra los efectos perversos del neoliberalismo y las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

LA COORDINADORA COMO NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL

En ese acápite se definen las principales características de la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, a la luz de la emergencia de movimientos sociales contra la globalización neoliberal, surgidas en los últimos años.

M. Castells, siguiendo a A. Touraine, clasifica los movimientos sociales según tres principios:

- *Adversario*: Principal enemigo del movimiento, según lo identifica este de forma explícita.
- *Identidad*: Autodefinición del movimiento, de lo que es, en nombre de quien habla.
- *Objetivo social*: Visión del movimiento del tipo de orden social, u organización social, que desearía obtener en el horizonte histórico de su acción colectiva (1997, p. 94).

El movimiento social alrededor de la Coordinadora será analizado bajo esta perspectiva

El adversario: el modelo de desarrollo privado

La crítica fundamental de la Coordinadora, tanto a la Ley 2029, de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, como al contrato con la empresa «Aguas del Tunari», ha sido la inequidad en el acceso y uso del agua potable y los recursos hídricos.

En el caso de la Ley, entre otros aspectos, se tradujo en el cuestionamiento a la orientación de la Ley hacia la otorgación de concesiones privadas, tanto de la fuente de agua como del servicio, excluyendo o dejando en incertidumbre la propiedad de las fuentes de agua, los usos y costumbres, y la obligatoriedad de los servicios alternativos de distribución de agua (cooperativas, comités, asociaciones) de articularse a los concesionarios privados. Se discutía, por tanto, el hecho de incorporar el agua dentro una lógica privada y una disciplina de mercado.

En el contrato con Aguas del Tunari, la Coordinadora también apuntó los dardos a la visión empresarial de ganancia, basado en un incremento tarifario del 35 por ciento promedio, al inicio de su la administración, sin haber realizado inversión alguna, para garantizar una Tasa Interna de Retorno del 16 por ciento; asimismo criticaba el carácter monopolístico de la concesión, poniendo en riesgo la multitud de sistemas alternativos autogestionarios de distribución de agua.

De esta manera, el movimiento de Cochabamba, bajo las consignas «el agua es un don de Dios y no una mercancía» y «el agua es nuestra, carajo», puso en tela de juicio uno de los pilares del modelo neoliberal: la privatización, en este caso

de los servicios básicos, como mecanismo de solución a la escasez e ineficiencia en el manejo del agua potable y los recursos hídricos.

La empresa concesionaria «Aguas del Tunari» estaba conformada por un consorcio anglo-español-boliviano, donde el principal accionista, International Water, pertenece a la multinacional de servicios básicos Bechtel; por su parte, la ley 2029, coherente con las líneas propuestas por el Banco Mundial, se orienta claramente a atraer capitales multinacionales en las concesiones. De ahí que la lucha por la nulidad del contrato con «Aguas del Tunari» se ajusta a la de los movimientos sociales que rechazan la globalización neoliberal y sus efectos perversos, con su lógica privada, no sólo en los países del Sur, sino también en los industrializados, como reflejan las protestas de Seattle, Washington y Praga.

La globalización está siendo resistida por las mujeres, la gente del Tercer Mundo y los ambientalistas del mundo entero...(Shiva 2000, p. 1)

«Lo que SEATTLE significa es el fin de la ilusión neoliberal de un planeta autogestionado por los mercados para el beneficio de los más fuertes, de los más listos y, también, de los más pillos. La sociedad civil global, en su pluralidad contradictoria y necesariamente incoherente, ha irrumpido en los salones del des-poder diciendo aquí estamos, queremos saber y queremos influir en el proceso, debatir, negociar» (Castells 2000, p. 1)

Dos imágenes que simbolizan la resistencia al capitalismo global desde lo local: Oscar Olivera, dirigente de la Coordinadora, interviniendo en los actos de protesta de abril en Washington, contra las políticas del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, y exponiendo la experiencia cochabambina de «haber perdido el miedo» y expulsar una empresa multinacional; por otro lado, un orador estadounidense, en una de las concentraciones de la capital estadounidense destacando el ejemplo cochabambino a seguir en la resistencia a la globalización.

La identidad: el agua como bien público y diversidad organizativa

Un rasgo de los nuevos movimientos sociales es que sus demandas no tienen connotaciones clasistas ni están subordinadas a un fin teleológico con final feliz; si como dice U. Beck (1992) en el capitalismo global la producción de riqueza genera inevitablemente riesgos, por tanto, conflictos que afectan al conjunto del cuerpo social, vinculadas principalmente con problemáticas de la cotidianeidad de la gente: acceso a recursos y a sus beneficios, calidad de vida, ambiente, seguridad, flexibilidad laboral. La Coordinadora logró articular al conjunto de la población del área rural y la ciudad, principalmente, debido a que el acceso al agua potable y los recursos hídricos son temas que afectan a toda la población, particularmente los pobres, pues como decía una de las consignas de las movilizaciones «el agua es vida».

La defensa del agua es realizado desde un posicionamiento crítico del modelo privado: los recursos hídricos deben ser para todos, su acceso no debe ser restringido a un sector social o monopolizado por un sector o empresa, por tanto la Coordinadora discursivamente está hablando desde la reivindicación del agua como *bien de uso y acceso público*. Este hecho tiene más relieve en el caso cochabambino si tomamos en cuenta que en el valle, la escasez del recurso es un hecho cultural, tanto para la población urbana como rural: está en el imaginario de la población que el agua es escasa, por tanto existe una valoración mayor que en otras regiones, ergo la predisposición a defender derechos de acceso y uso son también mayores.

Estos elementos de cohesión regional en torno al agua se van coagulando a partir de una forma organizativa y una práctica política, que, rescatando elementos de los movimientos sociales de filón «cobista», incorpora elementos originales que la acerca al comportamiento y estructura de los nuevos movimientos sociales. Veamos sus principales aristas.

En relación a su estructura, la Coordinadora nace fundamentalmente alrededor de entidades autónomas como el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, la Federación de Regantes y la Federación de Trabajadores Fabriles, pero en ella han participado una multiplicidad de sectores, desde organizaciones vecinales, colegios de profesionales, perforadores

de pozos, maestros, campesinos, universidad, jubilados, hasta la «barra brava» del Wilsterman (el equipo de fútbol más popular del departamento)... y tiene un espectro también diverso de ideologías políticas: neomarxistas, ambientalistas, liberales demócratas, cívicos, jóvenes anarquistas

La experiencia de Seattle: «entre quienes estaban en las calles había obreros siderúrgicos, activistas de defensa de los derechos de los animales, las Hermanas de la indulgencia Perpetua, Pat Buchanan, fabricantes franceses de queso Roquefort, anarquistas, partidarios de un Tíbet Libre, estudiantes en contra de prendas fabricadas en talleres de costura que explotan la mano de obra, abuelas y también una buena colección de residentes locales» (Newsweek 1999:19).

Más aún, en los momentos de mayor intensidad del conflicto, como señala Komadina, la Coordinadora reflejaba la autorrepresentación del mismo pueblo (en las radios y TV se oía decir «la Coordinadora es todo el pueblo»). Esta composición heterogénea y diversa, que ha generado una revuelta nunca antes vista en la vida democrática del país, recuerda las protestas antiglobalización de los últimos meses en el mundo: movimientos, descentralizados, autónomos y multiformes, pero a la vez articulados en redes de coordinación de acciones.

De ahí que no existía un «jefe» alrededor del cual se centralizan decisiones; la Coordinadora ha mostrado un liderazgo colectivo, novedoso para la tradición sindical basada en la imagen del «dirigente». Mas aún, en muchos casos otra gente de base, principalmente al inicio del movimiento, hablaba en nombre de la Coordinadora. Estos líderes tienen lecturas diferentes del problema, unos más radicales que otros, reflejo de la pluralidad existente en el interior del movimiento.

Respecto a sus acciones, la Coordinadora, si bien ha recuperado formas «clásicas» de protesta, en el marco de la tradición insurreccionalista de la Central Obrera Boliviana (COB) (bloqueo de caminos, paro indefinido), a la vez incorpora elementos de protesta novedosos, espectaculares, de gran impacto en los medios de comunicación (llamar a la «toma simbólica de Cochabamba», quema pública de facturas, *graffitis*, protesta de los martes en la plaza de armas, cerco a la prefectura, concentración festiva de Carnaval), rasgo característico de los nue-

vos movimientos sociales. Asimismo combinar la presión social con la lucha legal (demanda ante el tribunal constitucional), como otro escenario de resistencia, es una de las innovaciones del movimiento del agua.

«el vigoroso impacto de cada uno de estos movimientos ha obedecido, en buena medida, a su presencia en los medios de comunicación y a su uso efectivo de la tecnología de la información», para ello se recurre a la experiencia anarquista francesa del 68, la «acción ejemplar»: «una acción espectacular que, por su atractivo, incluso mediante el sacrificio, atrae la atención de la gente hacia las demandas del movimiento y pretende en última instancia despertar a las masas, manipuladas por la propaganda y sometidas por la represión.» (Castells 1997:129)

La Coordinadora tuvo una gran presencia en los medios de comunicación, mostrando no sólo un manejo diferente de éstos, sino también realizando una novedosa utilización de las nuevas tecnologías de información: fax y correo electrónico para enviar y recibir mensajes, celulares para comunicación entre los líderes del movimiento (urbano y rural) durante momentos de bloqueos y enfrentamientos con la policía, información en páginas web para denunciar la situación, recuperar información de la web para argumentar en las negociaciones y contar con noticias actualizadas sobre la problemática, redes de solidaridad en la web.... El conflicto del agua en Cochabamba seguramente es la primera revuelta en la era del Internet, en el país.

En suma, un tema regional es articulado a una problemática global, y usando recursos tecnológicos de la «era global», en una suerte de guerrilla informacional, que tuvo efectos contundentes.

Objetivo social: reivindicar formas de apoyo mutuo, solidaridad y participación democrática

El neoliberalismo, discurso económico para la expansión del capitalismo global, es en el fondo «un programa de destrucción metódica de lo colectivo-comunitario» (Bourdieu 1999:1), y a la vez una exaltación del individuo como el sujeto por excelencia del modelo.

Similar a muchos nuevos movimientos sociales, la Coordinadora, en su defensa del agua como bien público escarba, directa o indirectamente, una ética comunitaria, de apoyo mutuo (formas de gestión comunitaria del agua, sea riego o consumo humano) y solidaridad, frente a la lógica privada y mercantilista del modelo, expresado en el contrato y la Ley.

A la vez, las movilizaciones de la Coordinadora reflejan la demanda por una mayor participación en la gestión local, esto es control democrático de la toma de decisiones. En ese sentido, refleja la impronta de los excluidos por el modelo neoliberal por una participación democrática, en el contexto de un sistema político boliviano que tiende a promover el fortalecimiento del principio de gobernabilidad como garantía de estabilidad del modelo.

La reivindicación de un acceso equitativo y público a los recursos hídricos, y la incorporación de un principio de sustentabilidad en su aprovechamiento, particularmente del sector campesino y regante de movimiento de la Coordinadora, la articula con los movimientos sociales de los sectores más pobres y excluidos por el modelo, contra la privatización y/o el incremento de restricciones en el acceso y uso de recursos naturales, profundizados por el Ajuste Estructural; trabajadores agrícolas sin tierra, indígenas que han perdido sus territorios, migrantes de la ciudad sin acceso a espacios de reproducción, pobres de la ciudad que viven en los espacios ambientalmente más devastados por el desarrollo urbano y la expansión capitalista; es decir sectores sociales que están luchando por una distribución ecológica más equitativa (Martínez Alier 1995). Pero también movimientos que están resistiendo a la lógica capitalista de privatizar los beneficios (externalidades positivas) y socializar los costos (externalidades negativas) (Sabatini 1998).

Existen muchas denominaciones a este tipo de movimientos: Ecoligismo Popular (Martínez Alier 1995), Ecoligismo de los Pobres (Guha 1989), Justicia Ambiental (Martínez Alier 1999), pero lo importante es que estos movimientos ponen en evidencia las contradicciones generadas por el Ajuste Estructural y el capitalismo global.

DISPOSITIVOS DE PODER QUE LA GUERRA DEL AGUA HA PUESTO EN TELA DE JUICIO

M. Foucault considera que el Poder en las sociedades modernas trabaja a través de «amoldar» el alma; inspirado en el poder pastoral inventado y ejercido por la Iglesia, el poder se orienta al control sobre el individuo, formando y transformando su conciencia. Al producir subjetividad de los individuos el Poder diseña las relaciones entre y con los demás. Al mismo tiempo, el poder no es solamente una relación entre individuos, es una manera de generar ciertas acciones que modifican otras acciones (Foucault 1992, p. 314).

En la sociedad moderna las relaciones de poder han venido bajo el creciente control del Estado: a través del sistema pedagógico, judicial, económico o familiar. Las instituciones formando nuestra subjetividad definen el campo de nuestras acciones: bueno contra malo; sensato contra demente; hombres contra mujeres; estorbo contra capaz, etc. (Foucault 1992: 310).

La forma en la cual el poder guía la conducta de los individuos y la moderna racionalidad, que demanda que todos y cada uno sean manejados, Foucault la denomina Gubernamentalidad (Foucault et al. 1991), entendido como el «arte de gobierno»; como decía Foucault, «Gobernar es estructurar el campo de posible acción de otros.» (Foucault 1992, p. 314), y por otro la moderna racionalidad que demanda que todos y cada uno sean manejados (Moss 1999, p. 3); De esta manera, la conducta de los individuos es influida por el Estado y sus instituciones.²

Dos de las artes de gobierno destacadas por Foucault son la lógica de la Razón de Estado, como complejo de «cosas y hombres» a ser administrados por su propio bien, y la Teoría de la Police o Ciencia de la Administración, que considera que los brazos del gobierno deben intervenir para asegurar el florecimiento de todos los aspectos del individuo: cuerpo, alma, bienestar... en suma, su «felicidad» (idem 1999, p. 3), pero entendiendo que la felicidad de los individuos es un requerimiento para la sobrevivencia y desarrollo del estado, antes que la prueba de un buen gobierno (Allen 1999, p. 186).

Ambas artes de gobierno se traducen en dispositivos, entendidos como unas estrategias de relaciones de fuerza (léase poder) soportando unos tipos de saber y soportada por ellos,

² Aunque también, para Foucault, el gobierno de las conductas usualmente involucra un grado de autogobierno.

que incluye un conjunto de elementos, estén o no visibilizados³ (Foucault en Minello 1999, p. 99). Un tipo de dispositivo son los discursos verdaderos⁴ con los que funciona una sociedad, sentidos que constituyen sujetos, generan conocimientos y creencias, promueven prácticas, actitudes, valores y comportamientos, es decir normalizan a los individuos.

Las estrategias de normalización, como las arriba mencionadas, constituyen un efecto del poder, las que en muchos casos son resistidas por aquéllos quienes se supone son normalizados (Darier 1999, p. 18).

No hay relación de poder sin los medios de escape o lucha. Cuando las personas entran en confrontación, ellos se comprometen en una particular relación de poder —ellos quieren definir las acciones de los individuos o organizaciones que están con relación a ellos. Si el poder actúa directamente en los cuerpos o cosas, si no hay ninguna relación entonces éste no es un poder— es destrucción, violencia, dominio físico, amo y esclavo (Foucault 1992, p. 314).

Por ello, la Guerra del Agua puede ser entendida como una expresión de resistencia al proceso de normalización (Darier 1999, p. 19), y a la vez reflejan la crisis de Gubernamentalidad que sufre el Estado boliviano: es decir una crisis de disciplina y normalización, que el conflicto ha visibilizado con claridad, y que casi genera una conflagración social de magnitudes que han ido más allá de lo previsto por el actor más importante: la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida.

En el siguiente acápite analizaré cómo la Guerra del Agua ha puesto en evidencia la crisis de las estrategias de disciplinamiento y normalización de la sociedad, en la medida que el conflicto puso en tela de juicio un conjunto de *dispositivos discursivos* con los cuales el sistema político y en general el modelo ha estado funcionando, y ha formado parte del imaginario colectivo, durante estos quince años de Ajuste Estructural. Las políticas públicas en Bolivia han promovido, de una u otra manera estos dispositivos, y la población los internalizó como discursos de «verdad», que la Guerra del Agua ha desnudado, mostrando sus contradicciones, la precariedad de su implementación y, en suma, visibilizando la crisis del modelo; en ese sentido el conflicto constituye un «análizador de la sociedad» (Seductor Melodioso 2000, p. 1).

La Gobernabilidad como sinónimo de Democracia

Las reformas políticas han traído consigo la noción que por encima de todo se halla la defensa de las instituciones del sistema político; el problema es que paulatinamente se ha estado asociando la Democracia al funcionamiento de estas instituciones: mientras el Parlamento, los partidos políticos y el gobierno central funcionen, aunque sea bajo una lógica clientelista, corrupta y autoritaria, se dice que la Democracia funciona. La generación del Ajuste Estructural está creciendo en la creencia que el sistema político vigente es el único escenario posible de representación democrática.

La Coordinadora, al exigir una participación democrática en la toma de decisiones, al implementar formas de consulta pública y democracia directa, reivindicó la idea de Democracia como soberanía del pueblo (Seductor Melodioso 2000, p. 1), como autorepresentación (Komadina 2000), cuestionando el rol del sistema político dominante como referente de la democracia. En ese sentido, se puede oír en el conflicto las voces del pueblo como constructor de la democracia.

La mediación política por excelencia son los partidos políticos

El producto más importante de la Revolución del 52 fue sin duda la creación de la Central Obrera Boliviana, institución que fue más allá de sus roles meramente sindicales reivindicativos, para convertirse en determinadas coyunturas en verdadero factor de poder, tanto que los partidos políticos actuaban en función a sus posiciones e intervenciones.

³ ...trato de designar con este nombre (dispositivo) ...en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo, que implica discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos; proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en síntesis tanto lo dicho como lo no dicho... El dispositivo mismo es la red que puede establecerse entre estos elementos (Foucault en Minello 1999, p. 99).

⁴ "... Por verdad (quiero decir) el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verdadero efectos político de poder" (Foucault en Minello 1999, p. 183).

Con el Ajuste Estructural, no sólo se liquidó el rol político de la COB, sus virtudes como potencial forma de autoorganización de la sociedad civil, sino que también instituyó la forma partido como el único mecanismo para canalizar demandas sociales y mecanismo de comunicación de la sociedad civil y el Estado. A partir de 1985, la política en Bolivia pasa por la estructura partidaria y sus rituales de liderazgo.

La Coordinadora constituyó una forma organizativa, que si bien se asienta en la experiencia política de la COB, manteniendo la autonomía frente a los partidos políticos, va más allá de ella, pues rompió los principios de «centralismo democrático» y subordinación al discurso obrerista: la Coordinadora no sólo se protegió de la influencia partidaria, a la vez mantuvo una estructura que respetaba la diversidad discursiva y organizativa de sus miembros.

Las barricadas de la plaza, durante casi una semana en abril, defenestraron la forma partido como mediación única: la población construyó su propia forma organizativa, frente a la desconfianza del sistema político tradicional. Oscar Olivera decía, a propósito de la confianza de la población en la Coordinadora: «por primera vez, luego de quince años, la gente cree en algo, pues confía en que no se le está engañando».

El Mercado es el medio de gestión más eficiente de gestión de los recursos

El capitalismo global mantiene una profunda confianza en la capacidad del Mercado para administrar los recursos naturales (RRNN); aplicando el principio de que el Mercado genera bienestar social, los RRNN tampoco debieran ser la excepción, de ahí la necesidad de incorporar a la disciplina del Mercado la gestión y conservación de los RRNN. Las políticas de RRNN, y el agua en particular, han estado movidos bajo estos dispositivos.

Por otro lado, el discurso de verdad instituido por el Modelo es que la sociedad boliviana debe articularse al carro globalizador y el mercado es el boleto de ingreso; la sociedad boliviana funciona bajo esa creencia, las decisiones se toman bajo este referente, y coherentemente la Ley 2029 y el Contrato estaban iluminados de esta fe.

La Guerra del Agua ha mostrado que existen otros dis-

curso de verdad, basados en una lógica comunitaria y de apoyo mutuo, que el acceso y uso a los RRNN, en este caso el agua, no debe estar articulado a una lógica de lucro y ganancia. En suma, que es necesario construir formas alternativas de desarrollo sin depender de la teología del mercado.

«No Long Term»

Uno de los rasgos del capitalismo global es la incertidumbre e inseguridad (Sabatini 1995), pues está basado en un fenómeno que Richard Sennet denomina *no long term* (1998, p. 27), es decir funciona con una visión de corto plazo, tomando en cuenta los requerimientos inmediatos del Mercado, siempre cambiante e inseguro; el otro aspecto es la flexibilidad productiva y laboral: la producción de hoy puede cambiar mañana en función a la demanda del Mercado, por tanto la demanda laboral también será distinta; en suma en este modelo no es posible planificar en el largo plazo. Sennet se pregunta «¿Cómo se pueden conseguir propósitos de largo plazo en una sociedad del corto plazo? ¿Cómo se pueden sostener relaciones sociales durables? ¿Cómo puede desarrollar un ser humano la narrativa de identidad e historia de la vida en una sociedad compuesta de episodios y fragmentos? (1998, p. 27).

Para el principio de sustentabilidad y las políticas públicas que requieren su operacionalización, ésta es una contradicción del funcionamiento del modelo de desarrollo, pues mientras el Ajuste Estructural se mueve con una visión cortoplacista (*no long term*), por su orientación a un mercado externo globalizado, en cambio permanente, con un alto nivel de incertidumbre, las políticas ambientales para garantizar un desarrollo sustentable, bajo el principio de equidad intergeneracional, requieren un enfoque de largo plazo.

Una de las aristas importantes del movimiento de la Coordinadora ha sido el cuestionamiento de la explotación no sustentable de los recursos hídricos, bajo criterios cortoplacistas; en el área rural, desde las movilizaciones campesinas contra la perforación de pozos profundos a mediados de los noventa (Crespo 1999), hasta las reivindicaciones actuales de la FEDECOR de defender los «usos y costumbres» como mecanismo para evitar la sobreexplotación, se observa una constante: la necesidad de conservar el recurso para las próximas gene-

raciones, pues de ella depende su subsistencia, y la reivindicación de formas asociativas de acceso y uso como mecanismo de su conservación.

La Participación como concertación y consenso

El Banco Mundial, como parte del paquete de medidas de Ajuste Estructural, promueve la participación ciudadana, entendida como «un proceso a través del cual los *stakeholders* influyen y comparten el control sobre iniciativas de desarrollo y las decisiones y recursos que los afectan» (Participation Learning Group Final Report in www.worldbank.org/). Es decir, «para establecer un proceso de planificación participativo, los que diseñan proyectos primero deben identificar aquellos que podrían estar involucrados en el proceso, o *stakeholders*. *Stakeholders* son aquellos actores cuyos intereses son afectados por las intervenciones (en este caso del Banco). Sus intereses y niveles relativos de influencia y poder variarán de proyecto a proyecto y deberían ser identificados a través de un análisis de cada situación. (fuente: www.worldbank.org/). Se trata de considerar los intereses comunes de diferentes actores involucrados en procesos de desarrollo, se asume que éstos han concertado intereses, por encima de posiciones particulares; de esta manera, las políticas reflejarían los intereses de toda la gente cuyas vidas son afectadas por las políticas públicas.

Los procesos de descentralización e implementación de la Ley Participación Popular se inspiran en este dispositivo: participar es concertar con los diferentes *stakeholders* o actores, alcanzar consensos en temas del desarrollo local-regional. Con estas medidas se han incrementado las competencias y capacidades de las instancias de gobierno local y regional.

La Guerra del Agua ha puesto un signo de interrogación a estos dispositivos relativos a la participación ciudadana. En primer lugar, mientras el modelo de desarrollo produce asimetrías y exclusión social, promueve una distribución inequitativa de los recursos, como muestra la aprobación de la Ley 2029 y el contrato con «Aguas del Tunari», las políticas públicas promueven procesos de participación y concertación, asumiendo que todos los actores involucrados están en las mismas condiciones relación de fuerzas. En Bolivia definitivamente

no existen actores iguales, pues el acceso a la información, recursos económicos, técnicos, influencia en las agencias gubernamentales no es equitativo, mas aun la cultura política latinoamericana, basada en lógicas de clientelismo, corrupción, hace que la correlación de fuerzas entre los actores involucrados sea desigual. El conflicto aparece por tanto como un acto de, por un lado, visibilizar actores no reconocidos por el Estado y, por otro obligar a los sectores dominantes a dialogar y llegar a acuerdos.

En segundo lugar, concebir la participación como un procedimiento administrativo de consulta y no un hecho político de toma de decisiones muestra las debilidades la Participación Popular. La Guerra del Agua mostró la demanda de la sociedad civil de asumir un rol protagónico en la toma de decisiones: una ley aprobada de forma inconulta, un contrato firmado a espaldas de la sociedad,⁵ influyeron en la magnitud del conflicto.

En tercer lugar, en los tiempos que corren la Participación Popular se plantea como escenario de conflicto antes que de concertación y consenso: con municipios corruptos donde los líderes locales constituyen poderes autoritarios y clientelistas, la enseñanza de la Coordinadora del Agua es la oportunidad que tiene la sociedad civil de fiscalizar la gestión local; así como se expulsó a una multinacional apadrinada por el gobierno gracias a un proceso de fiscalización, es posible realizar un seguimiento estricto a los gobiernos municipales y las empresas de servicios básicos.

El mito regional Misicuni

Los cochabambinos han crecido con el convencimiento que el proyecto Misicuni es la solución a la crónica escasez de agua y la piedra de toque para el desarrollo de la región; más aún, yo diría que Misicuni forma parte de los indicadores que caracterizan a «lo cochabambino». Bajo ese discurso de verdad los políticos elaboran sus ofertas, el gobierno diseña políticas para

⁵ Entre los términos del Contrato con «Aguas del Tunari» existía una cláusula de confidencialidad, por la cual las partes (El Estado y la empresa) se obligaban a no difundir determinados detalles de éste.

la región, el sector privado construye sus sueños de convertirse en la «gran y sólida empresa», y el pueblo se moviliza y hasta derramar sangre.

A la vez, Mísicuni ha abierto un debate técnico no resuelto sobre la viabilidad del proyecto, que ha quedado en los círculos de los especialistas, más aún la población conoce muy poco sobre los verdaderos detalles del alcance del proyecto.

Nuevamente, el conflicto ha puesto en el tapete la demanda de la región de conocer la verdad acerca de Mísicuni: ¿es Mísicuni un proyecto de una oligarquía regional que sueña con modernizarse? ¿Qué intereses ocultos existen tras el proyecto? ¿Por qué insistir con un megaproyecto multipropósito en una época donde este tipo de obras están siendo criticadas por sus graves impactos sociales y ambientales? En las discusiones al interior de la Coordinadora ha surgido la demanda de transparencia en la información sobre Mísicuni, más aún, hace un par de años plantear proyectos alternativos a Mísicuni era correr el riesgo de ser considerado antiochabambino, la Guerra del Agua ha planteado la necesidad de discutir y plantear otras alternativas posibles, evitando la instrumentalización y la manipulación política.

A MANERA DE EPÍLOGO

1. Hoy existe una gran incertidumbre respecto al desafío de administrar el agua en la ciudad de Cochabamba bajo criterios de bien común y solidaridad, pues los poderes a los que el movimiento de la Coordinadora ha afectado buscarán aislar, deslegitimar a la futura empresa distribuidora del agua, o sus líderes sean cooptados por el poder y su sistema político. De todas maneras, hasta donde ha llegado, el «fenómeno» Coordinadora ha promovido la modificación del espectro político del país: luego de las jornadas de febrero y abril, Cochabamba y el país ya no será el mismo, y los futuros movimientos sociales en el país tomarán como referente la experiencia cochabambina.
2. La apuesta para la sociedad civil boliviana es generar nuevas «Coordinadoras», recreando imaginativamente su estructura y prácticas, por tanto no necesariamente se debe pensar la Coordinadora como una institución perdurable en el tiempo:

la movilidad y flexibilidad de la Coordinadora ha sido su virtud y no se la debe ver como la «nueva forma COB».

3. La Coordinadora se asienta en la tradición insurreccionalista de la «forma COB» y recupera prácticas democráticas de sus mejores momentos históricos; a la vez se enriquece de los rasgos de «ecologismo popular» proveniente de los campesinos y regantes del valle cochabambino; pero, al mismo tiempo está pergueñando rasgos de ruptura con la tradición clasista y centralista de la tradición sindicalista; por otro lado, su desdén por el sistema político vigente y su reivindicación de participación democrática, solidaridad y bien común, está orientando los nuevos escenarios y desafíos de la democracia boliviana.
4. La Guerra del Agua ha puesto en tela de juicio un conjunto de dispositivos de poder discursivos que constituyen a los sujetos regionales y nacionales, y bajo los cuales ha estado funcionando la sociedad boliviana en los quince años de Ajuste Estructural.
5. La crisis del Estado boliviano es su crisis de gubernamentalidad, es decir la escasa capacidad de aplicar el «arte» de gobernar, administrando las voluntades de sus gobernados, normalizando las conductas, basados en los discursos de verdad producidos por el paradigma neoliberal. Ello se traducirá sin duda en nuevos movimientos de resistencia a los poderes instituidos, desde escenarios, múltiples, descentralizados, combinando la tradición insurreccionalista de los movimientos sociales bolivianos con las tácticas de guerrilla informacional de resistencia al capitalismo global.

BIBLIOGRAFÍA

- ALLEN, Barry (1999), «Foucault and Modern Political Philosophy», in *Discourses of environment*, Ed. Eric Darier, Blackwell, Oxford
- BECK, Ulrich (1992), *Risk society : towards a new modernity*, London, Sage.
- BOURDIEU, Pierre (1999), *The essence of Neoliberalism*, Le Monde Diplomatique, December.
- CASTELLS, Manuel (1997), *La Era de la Información. Economía sociedad y Cultura, Vol 2, El poder de la identidad*, Alianza Editorial, Madrid.

La guerra del agua en Cochabamba

- CASTELLS, Manuel (2000), «Seattle y el cinismo neoliberal», en *El País*, 3 de enero (www.elpais.es).
- CRESPO, Carlos (2000), «El Pueblo Sencillo y Trabajador»: *La Coordinadora como Nuevo Movimiento Social*, Mimeo, Cochabamba.
- (1999) «La Guerra de los pozos», en *Conflictos Ambientales*, CERES. Cochabamba.
- DARIER, Eric (2000), «Foucault and the environment», en *Discourses of environment*, Ed Eric Darier, Blackwell, Oxford.
- DOYLE, Timothy and MCEACHERN, Doug (1998), *Environment and Politics*, Routledge, London, 61.
- ELLIOTT, Michael (1999), *Nuevos extremistas*, en Newsweek en español 15 diciembre, Santiago.
- FOUCAULT, Michel (1991), «Gubernamentalidad», en *Espacios de Poder*, Varios, Ediciones de La Piqueta, Madrid.
- (1992), «The Subject and Power», in *Critical Theory*, Eds. David Ingram and Julia Simon-Ingram, New York, Paragon House, pp. 303-319.
- GUHA, Ramachandra (1989), *The unquiet woods : ecological change and peasant resistance in the Himalaya*, Delhi, Oxford University Press.
- KOMADINA, Jorge (2000), *Buscando al pueblo*, Cochabamba, Mimeo.
- MARTÍNEZ ALIER, Joan (1995), *De la economía ecológica al ecologismo popular*, Icaria, Barcelona.
- (1999), «La economía ecológica como ecología humana», en Ricaldi, T (ed.), *Una nueva mirada a la ecología humana*, Cochabamba, UNESCO-CESU.
- MINELLO, Martini, Nelson (1999), *A modo de silabario. Para leer a Michel Foucault*, El Colegio de México, México D. F.
- MOSS, Jeremy (1999), «Introduction: the later Foucault», en *The later Foucault*, Ed. Jeremy Moss, SAGE Publications, London.
- SABATINI, Francisco (1995), *Apuntes de Dossier I Maestría Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible*, CESU, Cochabamba, Mimeo.
- (1998), «Conflictos ambientales en América Latina: distribución de externalidades o definición de derechos de propiedad» en Crespo, C y Ricaldi, T (eds.), *Del Desarrollo Humano a la Economía Ecológica*, Cochabamba-Bolivia, CESU-PNUD.
- SENNETT, Richard (1998), *Why good workers make bad people*, en New Stateman, Octubre. pp 25-27, London.
- SEDUCTOR MELODIOSO (seudónimo) (2000), *Aguas del Tunari: el Contrato y la Soberanía del Pueblo*, Cochabamba, Mimeo.
- SHIVA, Vandana (2000), *Poverty and Globalisation*, en Reith lectures (summary), http://newsl.thls.bbc.co.uk/english/static/events/reith_2000/text.
- WORLD BANK (1999), *Bolivia: Public Expenditure Review*, Washington.



REVISTA DEL SUR
PRODUCCIÓN DE LA RED DEL TERCER MUNDO

Es una publicación mensual, con informes y análisis exclusivos, sobre los problemas que afectan a los pueblos del Tercer Mundo y sobre las alternativas diseñadas por estos mismos pueblos para superar la dependencia y la pobreza, explotar sus recursos naturales y contribuir al equilibrio ecológico del planeta.

UNA VOZ PARA LOS PUEBLOS DEL SUR

SUSCRÍBASE Y LÉALA TODO EL AÑO POR SÓLO us 50 (cheque/giro a nombre del ITeM)

INSTITUTO DEL TERCER MUNDO
Jairo D. Jacome, J124
Montevideo 11.200 - Uruguay
Tel. (5982) 466150 • Fax (5982) 416122
Correo electrónico: itdm@chaseq.org.uy